

Araya Grimaldo, Pía Camila
Salas Claussen, Dagmar Elizabeth
Prestaciones
Rol N° 139-2021.-(T-176-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena)

La Serena, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Que en autos caratulados "ARAYA CON SOCIEDAD DE EMERGENCIA MÓVIL INTEGRAL SpA Y OTRO", RIT T-176-2019, se pronunció, el tres de mayo de dos mil veintiuno, por don Vladimir Hernando Jofré Hidalgo, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, sentencia en procedimiento de aplicación especial, la cual acogió la demanda interpuesta por PÍA CAMILA ARAYA GRIMALDO en contra de la SOCIEDAD DE EMERGENCIA MÓVIL INTEGRAL SpA, acogiéndola respecto la denuncia de tutela por vulneración de garantía de indemnidad, condenándola a pagar a la actora la indemnización dispuesta en el inciso 3° del artículo 489 del Código del Trabajo, equivalente a seis meses de la última remuneración mensual por la suma de \$3.394.854; indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma \$565.809; indemnización por dos años de servicio por la suma de \$1.131.618; incremento de un 80% por despido indebido por la suma de \$905.294; y remuneraciones y demás prestaciones laborales que se devengaron, desde el término de la relación laboral hasta la convalidación del despido, por la suma de \$113.161; todo con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. Además, se rechazó la demanda interpuesta en contra de doña DAGMAR SALAS CLAUSSEN como persona natural, y se rechazó la solicitud de declaración de Unidad Económica entre las demandadas SOCIEDAD DE EMERGENCIA MÓVIL INTEGRAL SpA y doña DAGMAR SALAS CLAUSSEN.

En su contra, la parte demandada de SOCIEDAD DE EMERGENCIA MÓVIL INTEGRAL SpA, interpuso recurso de nulidad por la causal establecida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Declarado admisible el recurso, comparecieron a estrados los abogados de ambas partes, escuchados en audiencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.

Considerando:



PRIMERO: Que, en primer término, la demandada invocó la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, y afirma que el juez no consideró correctamente la declaración testimonial incorporada al proceso, tanto de los testigos de su parte como los de la contraria, prueba de la cual se puede extraer que en ningún momento su representada recibió alguna comunicación por parte de la actora, en cuanto a haber efectuado una denuncia a la Inspección del Trabajo, por hechos constitutivos de acoso laboral y sexual.

Sostiene que, de la declaración de todos los testigos, se logró acreditar con certeza absoluta, que su representada jamás tuvo conocimiento de hechos de acoso laboral y sexual ejercidos en contra de la actora, y en ese sentido, la carta supuestamente enviada por la actora a su mandante no implica necesariamente que ésta haya llegado a manos de la jefatura, para efectos de haber tomado alguna medida correctiva sobre estos hechos.

Argumenta que, si su representada no tuvo conocimiento de los hechos descritos en esa supuesta carta, jamás estuvo en su poder, haber tomado alguna medida, y más aún, no puede ser sancionada, como un empleador que ha despedido por vulneración a la garantía de indemnidad, ya que sin perjuicio de que la actora haya confeccionado dicha carta, esta jamás llegó a manos de la jefatura y por ende, el despido que se generó a los días, no puede ser considerado como un acto de represalia.

A su juicio, al proceso se acompañaron antecedentes suficientes que daban cuenta del actuar negligente de la actora, hechos que finalmente motivaron que su representada tomara la decisión de desvincularla.

Agrega que el juez tampoco apreció correctamente el documento denominado Comprobante de pago de Previred, el cual, claramente daba cuenta de que las cotizaciones previsionales de la actora se encontraban completamente pagadas, razón por la cual, no corresponde aplicar la sanción de nulidad contenida en el artículo 162 del Código del



Trabajo, por cuanto no había antecedentes que habilitaran para arribar a esa conclusión.

SEGUNDO: Que, respecto a la causal de nulidad establecida en el artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, debe considerarse que de la lectura del recurso, es posible avizorar que las críticas que se han formulado al fallo impugnado, se condicen con el intento que esta Corte efectúe una nueva evaluación de la prueba, que sea acorde con la teoría del caso de la recurrente, asunto que de acuerdo a la estructura del procedimiento, de única instancia, escapa a la competencia de estos sentenciadores.

Conviene recordar en este punto que el recurso de nulidad es un resorte procesal extraordinario y de derecho estricto, de interpretación restrictiva, razón por la cual debe ajustarse rigurosamente a la normativa que lo regula, por lo que su procedencia está limitada, en primer término, por la naturaleza de las resoluciones impugnables; en segundo lugar, por las causales que lo hacen procedente y que están expresamente establecidas en la ley, y además por las condiciones que debe cumplir el libelo en su formalización.

TERCERO: Que, en cuanto al vicio reclamado, el artículo 456 del Código del Trabajo dispone que el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, agregando que deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencias, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En consecuencia, el procedimiento laboral se basa en la libertad de prueba y, en cuanto a su ponderación, rige el sistema de la sana crítica, cuyas únicas fronteras son aquellas impuestas al tribunal en el precepto legal anotado.

Por otra parte, de existir una vulneración a estos principios que condicionan la forma de apreciar la prueba, el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo agrega una condición adicional, consistente en que se trate de una infracción "manifiesta", es decir, patente, ostensible, clara, que no dé cabida a dudas y que, como tal, involucre una abierta vulneración a los principios de justicia y de equidad natural.



CUARTO: Que esta Corte solo puede revisar los razonamientos y análisis de la prueba en cuanto se aparten, ostensiblemente, de la lógica, las normas de la experiencia o las reglas técnicas o científicas afianzadas, lo que está lejos de haber sucedido en la especie. Lo contrario implicaría apartarse del sentido del recurso de nulidad, en que solamente es dable una revisión de los aspectos de derecho, en el marco de un procedimiento de única instancia; por ello, este tribunal está impedido de entrar a discutir la valoración probatoria realizada por el tribunal a quo. La mera discrepancia del recurrente en relación a los hechos establecidos por el tribunal no puede ni debe constituir motivo para que esta Corte acceda a la nulidad pretendida, más aún si la ponencia del sentenciador se encuentra debidamente justificada y convenientemente razonada, e incluso, en contraposición de lo que expresa la recurrente de nulidad, la prueba rendida por ambas partes si fue suficientemente razonada y la decisión se apoyó básicamente en la prueba instrumental mediante la cual la actora acreditó haber remitido al domicilio de la demandante la misiva que ponía en conocimiento los hechos constitutivos de acoso laboral y sexual, documento que entregó personalmente en la Inspección del Trabajo el mismo día 15 de octubre. Por otra parte, ponderó correctamente el informe de previred, en cuanto de éste emana que al momento del despido, 17 de octubre, no se habían enterado las cotizaciones previsionales descontadas en la remuneración del mes de septiembre, para lo cual tenía plazo hasta el día 13 de ese mes.

QUINTO: Que de la lectura del recurso no se aprecia que en la ponderación de la prueba se hayan violentado los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente aceptados; es más, en el tenor del libelo recursivo no se señala en modo alguno que la actividad del sentenciador haya sobrepasado esos límites; de otra parte, lo que si deja la impresión el recurso es que de la forma en que se ha propuesto el remedio procesal evoca a un simple recurso de apelación, donde se pretende únicamente que esta Corte pondere nuevamente la prueba rendida ante el juzgado del trabajo buscando se arribe al resultado que mejor



convenga a sus intereses, lo que -como se dijo- está vedado a esta Corte a propósito de este recurso de derecho estricto.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo antes razonado, si bien se trata de un hecho negativo el acreditar no haber recibido la carta denuncia remitida a su parte por la trabajadora, se trata de un hecho que puede ser demostrado con el hecho positivo contrario, para lo cual bastaba con acompañar el certificado de correos que demostrara a quien y cuando se hizo entrega de la aludida carta certificada, lo que no hizo. Además, en la empresa debe existir un registro de correspondencia que demostrara las mismas circunstancias, lo que tampoco aportó para desvirtuar el indicio que si fue puesto a disposición del tribunal por la actora.

SEPTIMO: Que, por tanto, como resultado de todo lo reflexionado en los fundamentos que anteceden, el recurso de nulidad deducido por la parte demandada no puede prosperar y debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y atendido lo preceptuado en los artículos 477, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se declara:**

Que **SE RECHAZA**, con costas, el recurso de nulidad intentado por el abogado don **GUSTAVO TORRES MENDOZA**, en representación de la demandada principal Sociedad de Emergencia Móvil Integral Spa, en contra de la sentencia definitiva dictada por el juez (s) del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, Vladimir Jofré Hidalgo, el 3 de mayo de 2021 en autos sobre Tutela de Derechos Fundamentales, caratulados: "**ARAYA con SALAS**", causa **RIT T-176-2019**, la que, en consecuencia, no es nula.

Redacción del ministro titular, don Vicente Jesús Hormazábal Abarzúa.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 139-2021 Laboral.



Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Vicente Hormazábal Abarzúa, el Ministro suplente señor Jorge Corrales Sinsay y el Fiscal Judicial (I) señor Juan Carlos Espinosa Rojas. *No firma el Ministro señor Hormazábal, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.*

En La Serena, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de La Serena integrada por Ministro Jorge Corrales S. y Fiscal Judicial Juan Carlos Espinosa R. La Serena, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

En La Serena, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.